

Acuerdo de 7 de septiembre de 2023, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas cautelares, en relación con la licitación del “Servicio de Burofax para la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid” con número de expediente A/SER-011238/2023”.

Con fecha 6 de septiembre de 2023, se ha recibido recurso especial en materia de contratación interpuesto por la representación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. contra el anuncio y los pliegos del contrato de “*Servicio de burofax para la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid*” con número de expediente A/SER-011238/2023.

En recurso se fundamenta en que los criterios de valoración de las ofertas no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 145.4 LCSP y, en el escrito de interposición se solicita que se acuerde la suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del presente recurso, por los perjuicios que ocasionaría a los licitadores la revelación de sus respectivas ofertas en caso de prosperar el recurso.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

En la misma fecha de presentación del recurso se ha requerido al órgano de contratación la remisión del expediente de contratación y el informe, conforme a lo



dispuesto en el artículo 56.2 de la LCSP, no habiendo finalizado dicho plazo, a fecha de adopción del presente acuerdo, pero siendo necesario que este Tribunal decida sobre la medida cautelar sin contar con el pronunciamiento del órgano de contratación, atendiendo a los plazos que se expondrán más adelante, y al hecho de que no se ocasiona perjuicio al órgano de contratación al no suspenderse el plazo de licitación, como también se argumenta a continuación, coincidiendo además la finalización de aquel plazo con el otorgado al órgano de contratación para presentar su informe.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la



medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado avanzado en la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación muy similar.

En el caso que nos ocupa, consultado el anuncio de licitación, resulta que el plazo de presentación de ofertas finalizará el próximo día 11 de septiembre y la apertura de las ofertas económicas está prevista para el día siguiente, al tratarse de un expediente que se tramita por procedimiento abierto simplificado con sobre único, por lo que sería posible llegar al acto de apertura con anterioridad a la resolución del recurso, motivo por el cual este Tribunal considera que debe garantizar el secreto de las proposiciones hasta decidir sobre el fondo del asunto.

El apartado 4 del artículo 49 de la LCSP establece que *“Salvo que se acuerde lo contrario por el órgano competente, la suspensión del procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados”*.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,



ACUERDA

Suspender la tramitación del expediente de contratación “Servicio de Burofax para la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid” con número de expediente A/SER-011238/2023”, desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas y hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Por sustitución, conforme artículos 3.7 de la Ley 9/2010, 19.2 LRJSP y 5 RPERMC
LA VOCAL DEL TRIBUNAL

Firmado digitalmente por: ARCOCHA GIMENEZ MILAGROS
Fecha: 2023.09.07 13:12



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0925881894076965811556